

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, Quince (15) de Septiembre de Dos Mil Veintidós (2022)

Auto Interlocutorio

MAGISTRADA PONENTE: LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

ACCIÓN:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2018-00939-00
EJECUTANTE:	CARLOS ALBERTO MURGUEITIO MANRIQUE Y OTROS carlosmurgueitio94@yahoo.com cathymurgueitio9@yahoo.com mariandrea14@hotmail.com nubiazuluagagarcia@hotmail.com
EJECUTADO:	EMCALI EICE ESP notificacionesjudiciales@emcali.gov.co
ASUNTO	SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN

II. ANTECEDENTES

- La demanda ejecutiva

La parte demandante a través de la presente demanda ejecutiva solicitó que se librara mandamiento de pago por la suma de \$22.190.118,59, correspondiente exclusivamente a los intereses moratorios del artículo 177 del CCA, causados sobre el capital cancelado por EMCALI¹, en cumplimiento de la sentencia del 21 de marzo de 2013, proferida por el Consejo de Estado, dentro del proceso radicado con el No. 76001-23-31-0000-2003-01495, a través de la cual se dispuso lo siguiente:

“CONFÍRMASE el numeral primero de la sentencia de 10 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró la nulidad del Oficio No. 71800000-GA-003502 y del silencio negativo que surgió de la falta de respuesta de Emcali al recurso de apelación interpuesto por los demandantes.

REVÓCASE en lo demás la sentencia de 10 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en su lugar se dispone,

*SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho ORDÉNASE a las Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P. a liquidar las cesantías del señor **Pedro Alberto Murgueitio Retrepo** correspondientes al período trabajado en la entidad entre el 14 de agosto de 1997 y el 31 de enero de 1999; igualmente deberá liquidar la sanción moratoria por el no pago de la prestación durante el período comprendido entre el 15 de febrero de 1998 y el 4 de octubre de 2002, de acuerdo con lo establecido en la parte considerativa de la presente sentencia.*

TERCERO. La entidad demandada pagará la suma liquidada a los herederos del causante acreditados de acuerdo con lo establecido en las normas de sucesión.

CUARTO. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda”

La decisión anterior quedó debidamente ejecutoriada el 10 de mayo de 2013.

¹ Por el valor de **\$148.688.031**, pagado en las siguientes fechas:

- \$131.067.923 (noviembre 7 de 2013)
- \$11.402.208 (febrero de 2014)
- \$6.217.900 (septiembre 2 de 2014).



- **El mandamiento de pago.**

Mediante Auto de fecha 09 de diciembre de 2020, se libró mandamiento de pago en contra de EMCALI EICE ESP y a favor de los señores CARLOS ALBERTO MURGUEITIO MANRIQUE, CATALINA MURGUEITIO MANRIQUE y MARÍA ANDREA MURGUEITIO MANRIQUE, en calidad de herederos del beneficiario de la condena, por la suma de \$20.992.379.

Se señaló que como quiera que la sentencia base de ejecución ordenó que la entidad demandada debía pagar la suma liquida a los herederos del causante acreditados de acuerdo con lo establecido en las normas de sucesión y según Escritura Publica 2.811 del 28 de septiembre de 2019, allegada al plenario, los herederos del causante son los ejecutantes, en calidad de hijos, quedaba entonces acreditada la legitimación en la causa por activa.

Así mismo se señaló que de acuerdo con los actos administrativos que dieron cumplimiento a la sentencia base de ejecución se hicieron los siguientes pagos por concepto de cesantías y sanción moratoria de cesantías:

Valor pagado	Fecha de pago	Resolución	Fecha Resolución
\$131.067.923	7/11/2013	No. 001621	27/09/2013
\$11.402.298	2/01/2014	No. 001843	5/12/2013
\$6.217.900	2/09/2014	No. 001601	29/07/2014

Que, por tanto, en este caso, los intereses moratorios, debían liquidarse desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia (11 de mayo de 2013), hasta el 31 de agosto de 2014, (mes anterior al último pago) a la tasa efectiva diaria de acuerdo con los términos del artículo 177 del CCA, lo que correspondía al valor de \$20.992.379.

- **Contestación de la entidad ejecutada**

Surtida la respectiva notificación del mandamiento de pago, EMCALI EICE ESP no contestó la demanda ejecutiva, conforme con la constancia secretarial del 19 de octubre de 2021 visible en SAMAI.

I. CONSIDERACIONES

1. Sobre la Orden de seguir adelante la ejecución.

Se recuerda que el artículo 442 del Código General del Proceso en su numeral 2 dispone que cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.

http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr010.htmlDe acuerdo con el artículo 443 ibidem, si las excepciones no prosperan o prosperan parcialmente, en la sentencia se ordenará seguir adelante la ejecución en la forma que corresponda.

A su vez, el artículo 440 del mismo Estatuto procesal señala que, si el ejecutado no propone excepciones oportunamente, el juez ordenará, por medio de auto que no admite recurso, seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el



RADICACIÓN :76001-23-33-000-2018-00939-00
Medio de control : EJECUTIVO
Ejecutante : CARLOS ALBERTO MURGUEITIO Y OTROS
Ejecutado : EMCALI EICE ESP

3

mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado.

Como quiera que la entidad ejecutada no formuló alguna de las excepciones previstas en el artículo 442, numeral 2, pues no contestó la demanda ejecutiva, indiscutiblemente debe proceder la Sala a emitir la orden de seguir adelante con la ejecución mediante auto.

- Saneamiento del proceso

El artículo 42 del Código General del proceso señala que son deberes del juez entre otras, realizar el control de legalidad de la actuación procesal una vez agotada cada etapa del proceso.

Por su parte, el artículo 207 del CPACA dispone que, agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarreen nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes.

Ahora, debe recordarse que el Consejo de Estado² ha explicado que **el mandamiento ejecutivo, es una orden judicial provisional** de cumplir perentoriamente con una obligación que reúna las condiciones de un título ejecutivo, esto es que sea expresa, clara, actualmente exigible y que provenga del deudor. **La orden de seguir adelante** con la ejecución, ya sea que se adopte por auto o por sentencia, según se propongan o no mecanismos de defensa por el ejecutado, **se constituye en una orden judicial definitiva.**

Así mismo, la Sección Segunda del Consejo de Estado, entre otros pronunciamientos, en providencia de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 23001-23- 33-000-2013-00136-01(1509-16), con ponencia del Consejero RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS ha analizado el artículo 446 del CGP -Liquidación del crédito y las costas- en consonancia con el artículo 430 ibidem- mandamiento de pago- y la facultad de saneamiento prevista en el artículo 42 del mismo Estatuto, concluyendo que el mandamiento de pago no se convierte en una situación inamovible para el juez, pues con posterioridad a la expedición de esta providencia es posible variar el monto de las sumas adeudadas con el fin de adoptar una decisión que se ajuste a la realidad procesal de cara al título ejecutivo, así como a los demás elementos de juicio que obren en el expediente.

Explica que si con posterioridad a librar el mandamiento de pago, el juez se percató que aquél se profirió por mayor valor al que correspondía de conformidad con la sentencia judicial cuyo cobro se pretendía, está facultado para subsanar la inconsistencia advertida, pues los artículos 42 del Código General del Proceso y 207 del CPACA le imponen el deber de realizar el control de legalidad de la actuación procesal, una vez agotada cada etapa del proceso.

Que, en consonancia con lo anterior, los autos ilegales, como lo es aquel que libra el mandamiento por una suma superior a la que correspondía, no atan al juez ni a las partes pues carecen de ejecutoria, por lo cual la autoridad judicial puede hacer un control de legalidad posterior y subsanar las imprecisiones que evidencie.

Aduce además que, el papel del juez ordinario en el Estado Social de Derecho es el del funcionario activo, vigilante y garante de los derechos materiales que consulta la realidad subyacente de cada caso para lograr la aplicación del derecho sustancial, la búsqueda de la verdad y, por ende, la justicia material, por lo que al advertir un error debe proceder a

² En providencias de fechas tres (3) de mayo de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 25000-23-42-000-2014-02585-01(4918-15) y treinta y uno (31) de julio de dos mil diecinueve (2019), Radicación número: 25000-23-42-000-2015-06054-02(0626-19), Referencias: Procesos Ejecutivos, CP. SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ.

subsamarlo para no seguir incurriendo en el mismo, más aún, **“cuando pueden estar comprometidos recursos públicos”**.

En este caso, aunque en el mandamiento de pago se liquidaron los intereses moratorios en los términos del artículo 177 del CCA; sin embargo, resulta necesario subsanar dicha imprecisión en esta instancia procesal, por cuanto si bien, la providencia que contiene la obligación, fue proferida bajo el imperio del Decreto 01 de 1984-CCA, quedó ejecutoriada el día **10 DE MAYO DE 2013**, es decir, cuando ya estaba vigente la Ley 1437 de 2011.

- **Tránsito legislativo para efectos de liquidar intereses moratorios en procesos ejecutivos.**

Teniendo en cuenta entonces que la liquidación del crédito tiene como base el mandamiento de pago, así como, la sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecución, resulta necesario precisarse en esta instancia, si para el cálculo del valor de los intereses moratorios, deben aplicarse las reglas del artículo 177 del CCA tal como lo establece el título base de ejecución; o, al contrario, debe someterse a los términos de los artículos 192 y 195 CPACA. Lo anterior para efectos de establecer las reglas para liquidar el crédito, pues el aspecto temporal para la causación y cesación de los intereses de mora y la tasa aplicable para su cálculo resulta diferente en ambos Estatutos.

Sobre el particular debe señalarse que el artículo 177 del CCA indicaba que una vez en firme una sentencia condenatoria, contaba la entidad pública a cargo de su cumplimiento con un plazo de dieciocho (18) meses para ese efecto, so pena de ser ejecutable ante la justicia. Así mismo dispuso que las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarían intereses moratorios.

En su inciso 6° se estipuló que cumplidos seis meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o, de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces y hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma.

Ahora bien, el aludido artículo no consagró las tasas de interés comercial o moratorio, razón por la cual para su determinación es menester acudir a lo establecido en el artículo 884 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, que prescribe:

“Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, este será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990. Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria.”

En virtud de lo anterior, la tasa aplicable para liquidar los intereses de mora establecidos en el artículo 177 del CCA que se deben pagar por el retardo en el cumplimiento de los créditos judicialmente reconocidos mediante sentencias, es la equivalente a una y media veces el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Financiera (antes Bancaria) para el periodo de mora.

De otro lado, el artículo 192 del CPACA-, Estatuto que empezó a regir a partir de julio de 2012, en relación con el cumplimiento de las sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas, preceptúa lo siguiente:

“ARTÍCULO 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien

corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.

Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código.

...

Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.

En asuntos de carácter laboral, cuando se condene al reintegro, si dentro del término de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga, éste no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado, en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo.

El incumplimiento por parte de las autoridades de las disposiciones relacionadas con el reconocimiento y pago de créditos judicialmente reconocidos acarreará las sanciones penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales a que haya lugar.

Ejecutoriada la sentencia, para su cumplimiento, la Secretaría remitirá los oficios correspondientes.”

Por su parte, el numeral cuarto del artículo 195 del mismo Estatuto, dispuso que: “*las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratorio a la tasa comercial.*”

Por lo tanto, los intereses de mora se liquidarán de acuerdo con una fórmula variable, en la que un primer término transcurre entre el momento de ejecutoria de la sentencia y los diez meses de que trata el inciso 2° del artículo 192, en el que se causan intereses moratorios a una tasa del DTF, y luego de esos diez meses intereses moratorios a la tasa comercial.

La Corte Constitucional, en sentencia C-604 de 2012 declaró exequible el numeral cuarto del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, que consagra intereses moratorios a una tasa del DTF, al considerar que esta disposición: “*no vulnera el derecho a la igualdad, pues reconoce el pago de intereses moratorios por parte del Estado a una tasa especial justificada en virtud del procedimiento para el pago que deben cumplir las entidades públicas según la propia ley 1437 de 2011 para no desconocer los principios presupuestales y los trámites administrativos al interior de las entidades públicas.*”

De todo lo anterior se puede concluir que si bien tanto en el artículo 177 del CCA como en el 192 del CPACA se dispone que ejecutoriada la respectiva providencia, los beneficiarios deberán presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad responsable para hacerla efectiva, sin embargo, para efectos de que no cesen los intereses moratorios, en la primera disposición se prevé que aquellos, deben acudir ante la entidad a solicitar su cumplimiento con la documentación exigida, dentro de los 6 meses contados desde la



ejecutoria de la providencia, so pena que cesen tales intereses, desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma. Por el contrario, en la segunda disposición, cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.

De otro lado, la tasa aplicable para el pago de intereses moratorios es diferente, pues según lo previsto en el artículo 177 del C.C.A, ellos corresponden a una y media veces de los corrientes bancarios, por el contrario, de acuerdo con lo establecido por el artículo 195 del CPACA, los intereses moratorios deben liquidarse a una tasa equivalente al DTF³ a partir de la ejecutoria de la providencia y hasta los 10 primeros meses y a la tasa de mora comercial una vez vencido este término.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado⁴ explicó que la Ley 1437 de 2011, en los artículos 308 y 309, consagró el régimen de transición y vigencia, así como, las normas que derogó, respectivamente. La vigencia del nuevo Código se dispuso a partir del 2 de julio de 2012 y se ordenó aplicarla a todos los procesos, demandas, trámites, procedimientos o actuaciones que se inicien con posterioridad a dicha fecha, pero también expresamente se señaló que los que estuvieran en curso al momento de entrar aquella a regir, seguirían siendo gobernados por el régimen jurídico precedente.

Que, por lo tanto, a los trámites, procesos, actuaciones, procedimientos, demandas y actuaciones iniciadas antes del 2 de julio de 2012 se les aplica, en estricto rigor, el Decreto Ley 01 de 1984, desde su inicio y hasta su culminación, independientemente de la fecha en que ocurra esta última.

Señaló que el trámite de pago de condenas judiciales o conciliaciones previsto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, no constituye un procedimiento o actuación administrativa independiente o autónoma respecto al proceso o actuación judicial que dio lugar a su adopción, pues se concreta en simples actos de cumplimiento o de ejecución de las sentencias condenatorias o las conciliaciones, de manera que no representan la culminación de una actuación administrativa, ni pueden por lo mismo tener un tratamiento separado de la causa que las origina.

Sin embargo, en el mismo concepto del Consejo de Estado, resolvió el siguiente interrogante, respecto de los eventos en los cuales una entidad deba dar cumplimiento a una sentencia o conciliación con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (julio 2 de 2012), pero cuya demanda fue interpuesta con anterioridad a esta fecha: *“¿se debe liquidar el pago con intereses moratorios de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1437 de 2011 o con las disposiciones para la liquidación de intereses moratorios del Decreto 01 de 1984?”*

Con respecto a lo anterior, el Alto Tribunal indicó que la tasa de mora aplicable para créditos judicialmente reconocidos en sentencias condenatorias y conciliaciones debidamente aprobadas por la jurisdicción es la vigente al momento en que se incurre en mora en el pago de las obligaciones dinerarias derivadas de aquellas. Que, en consecuencia, cuando una entidad estatal deba dar cumplimiento a una sentencia o conciliación con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (julio 2 de 2012), pero cuya demanda fue interpuesta con anterioridad a esta, debe liquidar el pago con intereses moratorios de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1437 de 2011.

³ <http://www.banrep.gov.co/estad/economia/consulta-tasa-interes4.htm>. DTF “Es el promedio ponderado de las tasas de interés efectivas de captación a 90 días (las tasas de los Certificados de Depósito a Término a 90 días) de los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y corporaciones de ahorro y vivienda”

⁴ En Concepto de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014)- Rad. No. 11001-03-06-000-2013-00517-00, Número interno: 2184, Consejero ponente: ÁLVARO NAMÉN VARGAS.



Sin embargo, también expuso que, si el incumplimiento de la referida obligación se inicia antes del tránsito de legislación y se prolonga durante la vigencia de la nueva ley, la pena, esto es, el pago de intereses moratorios, deberá imponerse y liquidarse por separado lo correspondiente a una y otra ley.

Dicho concepto fue acogido por la Sección Segunda⁵ del Consejo de Estado, señalando que cuando las sentencias se expidieron en vigencia del Decreto 01 de 1984, pero su incumplimiento se proyectó en el tiempo abarcando la entrada en vigencia del CPACA, la normativa para liquidar los intereses moratorios se aplica de manera independiente, es decir, por los períodos que coinciden con las respectivas vigencias de los artículos 177 del Decreto 01 de 1984 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

Concluye entonces dicha Sección que los intereses de mora que se generen con ocasión de una sentencia proferida en esta jurisdicción, habrán de liquidarse conforme a la norma que rige al momento de su causación, por lo que respecto de las providencias que quedaron ejecutoriadas antes de la entrada en vigencia del CPACA, la respectiva mora se tasarà, en una parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Decreto 01 de 1984, y, la otra parte, conforme a la Ley 1437 de 2011, si la causación de los intereses se prolonga en el tiempo.

Para el efecto explicó que los intereses de mora habrán de liquidarse conforme a la norma que rige al momento de su causación, de modo que si la conducta tardía de la entidad obligada al cumplimiento del fallo se prolonga en el tiempo y se da durante ese lapso un cambio de legislación, es menester aplicar la norma vigente que abarque el respectivo período o días de mora de que se trate, por configurarse la mora día a día, causando interés por cada instante de retardo, bajo la ley que se encuentre vigente, **siendo imperiosa la tasa fijada en la disposición posterior.**

Por todo lo expuesto, se entendió que, si la demanda que originó el título base de ejecución fue presentada antes de que entrara a regir la Ley 1437 de 2011, es decir, con vigencia del CCA, pero el pronunciamiento que puso fin a la controversia se emitió cuando la nueva legislación ya estaba en vigor, la tasa de los intereses moratorios a aplicar es aquella prevista en el artículo **195 del CPACA.**

Así mismo que en los casos en que la providencia que contiene la obligación objeto de la ejecución, pese a ser aprobada y ejecutoriada en vigencia del Régimen anterior- CCA; la causación de los intereses moratorios se prolongó durante la vigencia del nuevo Estuvo Procesal- CPACA-, deben liquidarse los intereses de mora bajo las reglas del artículo 177 CCA, hasta el 02 de julio de 2012, -fecha en que empezó a regir en nuevo Código-, y en adelante deben liquidarse bajo la tasa del **artículo 195 del CPACA.**

Luego el Consejo de Estado en un pronunciamiento más reciente⁶ ha explicado que los intereses de mora que deben liquidarse al capital adeudado corresponden a los determinados en la norma que se encuentra vigente al instante en que se incurrió en la tardanza del pago de las obligaciones dinerarias, por lo que si la mora se causó en vigencia del CPACA se debe dar aplicación a **los artículos 192 y 195 de dicho Estatuto.**

⁵ En sentencia de tutela de fecha 01 de diciembre de 2017, Consejera Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, Rad. No. 11001-03-15-000-2017-02763-00 y en providencias de fechas veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), Consejero Ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, Radicación: 23001 23 33 000 2013 00136 01, Número interno: 1509-2016 y dos (2) de abril de dos mil veinte (2020), Consejero Ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, Referencia: Ejecutivo, Radicación: 76001-23-33-000-2015 01486-01 (0116-2018).

⁶ Providencias del siete (07) de julio de dos mil veintidós (2022), Radicación: 25000-23-42-000-2016-04077-01, CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, Referencia: EJECUTIVO.



Se concluye entonces que si la providencia que emerge como título de recaudo ejecutivo, pese a originarse de una demanda interpuesta en vigencia del CCA, quedó ejecutoriada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, los intereses moratorios deben liquidarse, conforme a los artículos 192 y 195 del CPACA, aplicables para establecer los periodos de causación y cesación y la tasa.

Como quiera que en el presente caso la providencia base de recaudo quedo ejecutoriada en vigencia del CPACA, los intereses de mora se deben liquidar de acuerdo con una fórmula variable, esto es, a una tasa DTF por los primeros 10 meses y, finalizado dicho término, a una tasa comercial.

Además, para establecer el periodo de causación de los mismos debe aplicarse la regla del del artículo 192 del CPACA consistente en que cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.

En este caso la parte ejecutante presentó solicitud de cumplimiento de la providencia objeto de ejecución el **04 DE OCTUBRE DE 2013**, es decir, por fuera del término de los 3 meses contados desde su ejecutoria, de que trata el artículo 192 del CPACA-, norma aplicable por haber quedado en firme la sentencia en vigencia del nuevo Estatuto-.

Por tanto, se modificarán los términos de la orden de pago, pues para determinar la suma debida se debía tener en cuenta que en este caso se causaron intereses moratorios con la tasa equivalente al DTF mensual certificado por el Banco de la Republica, por los tres primeros meses desde la ejecutoria de la sentencia, es decir, a partir de 10 de mayo de 2013 hasta el 10 de agosto de 2013. Cesaron desde el 11 de agosto de 2013 al 03 de octubre de 2013. A partir del 04 de octubre de 2013 hasta el 10 de marzo de 2014 se causan nuevamente los intereses moratorios a la tasa equivalente al DTF y del 11 de marzo hasta el 02 de diciembre de 2014 (fecha de pago efectivo de toda del a obligación), con la tasa de interés moratorio comercial (1.5. del interés bancario) así:

SUPERFINANCIERA DE COLOMBIA			LIQUIDACION INTERESES DE MORA					
RES. NRO.	VIGENCIA		DIAS	TASA INT. BANCARIO CTE	TASA MORA	TASA EFECTIVA DIARIA	CAPITAL ADEUDADO BASE DE LIQUIDACION INTERESES	VALOR INTERES DE MORA MENSUAL SOBRE CAPITAL VENCIDO
	DESDE	HASTA						
DTF MENSUAL	01-may.-13	31-may.-13	21	3,98%	0,0398	0,01069%	\$148.688.031,00	\$333.892,19
	01-jun.-13	30-jun.-13	30	3,94%	0,0394	0,01059%	\$148.688.031,00	\$472.286,18
	01-jul.-13	31-jul.-13	31	3,98%	0,0398	0,01069%	\$148.688.031,00	\$492.888,47
	01-ago.-13	31-ago.-13	10	4,07%	0,0407	0,01093%	\$148.688.031,00	\$162.521,08
	01-sep.-13	30-sep.-13	0	4,07%	0,0407	0,01093%	\$148.688.031,00	\$0,00
	01-oct.-13	31-oct.-13	28	4,02%	0,0402	0,01080%	\$148.688.031,00	\$449.577,06
	01-nov.-13	30-nov.-13	7	4,03%	0,0403	0,01083%	\$148.688.031,00	\$112.668,42
	01-nov.-13	30-nov.-13	23	4,03%	0,0403	0,01083%	\$17.620.108,00	\$43.869,69
	01-dic.-13	31-dic.-13	31	4,06%	0,0406	0,01090%	\$17.620.108,00	\$59.560,25
	01-ene.-14	31-ene.-14	2	4,03%	0,0403	0,01083%	\$17.620.108,00	\$3.814,76
	2372	01-ene.-14	29	4,03%	0,0403	0,01083%	\$6.217.900,00	\$19.519,55
	2372	01-feb.-14	28	3,97%	0,0397	0,01067%	\$6.217.900,00	\$18.571,25
	2372	01-mar.-14	10	3,89%	0,0389	0,01046%	\$6.217.900,00	\$6.501,45
	2372	01-mar.-14	21	19,65%	0,2948	0,07080%	\$6.217.900,00	\$92.443,82
	503	01-abr.-14	30	19,63%	0,2945	0,07073%	\$6.217.900,00	\$131.944,09
	503	01-may.-14	31	19,63%	0,2945	0,07073%	\$6.217.900,00	\$136.342,23
	503	01-jun.-14	30	19,63%	0,2945	0,07073%	\$6.217.900,00	\$131.944,09
	1041	01-jul.-14	31	19,33%	0,2900	0,06978%	\$6.217.900,00	\$134.501,88
	1041	01-ago.-14	31	19,33%	0,2900	0,06978%	\$6.217.900,00	\$134.501,88



1041	01-sep.-14	30-sep.-14	2	19,33%	0,2900	0,06978%	\$6.217.900,00	\$8.677,54
INTERESES LIQUIDADOS ENTRE MAYO 11 DE 2013 Y SEPTIEMBRE 2 DE 2014								\$2.946.025,87

Conforme a la liquidación anterior se deben por concepto de intereses de mora causados entre mayo 11 de 2013 y septiembre 2 de 2014, la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL VEINTICICO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (\$2.946.025,87) M/cte. **Dicha suma será indexada para su pago.**

En este punto conviene precisar que en este caso no se aplicó la regla de pago contenida en el artículo 1653 del Código Civil, consistente en que el pago se imputará primeramente a los intereses, pues las pretensiones de la demanda se centraron exclusivamente a reclamar los intereses moratorios sobre el capital pagado. Sobre el particular el Consejo de Estado en Providencia 9 de septiembre de 2021. Radicación: 17001-23-33-000-2018-00112-01, Consejero Ponente SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ ha señalado que “... *la aplicación del artículo 1653 del Código Civil es supletiva de la voluntad de las partes, pues en las relaciones civiles ella prima sobre las normas, salvo que tengan el carácter de orden público. En este sentido, en los casos en que se reúnan los requisitos legales para librar mandamiento o disponer seguir adelante con la ejecución, al juez le corresponde ordenar lo que pide el ejecutante, pues es quien sabe lo que se le debe y lo que no. En este caso, el ejecutante no planteó que la entidad le adeudara capital que generara nuevos intereses. Entonces, no le estaba permitido al juez cambiar la regla y hacer una imputación de pago, pues ello no está dentro de su resorte, mucho menos en aplicación del artículo 1653 del Código Civil*”.

- **De la liquidación del crédito**

Para la liquidación del crédito, se observarán las siguientes reglas, de acuerdo con el artículo 446 del Código general del Proceso:

1. Ejecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecución, cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados, de acuerdo con la suma de dinero determinada en la presente orden de seguir adelante la ejecución, con respecto a los intereses moratorios.
2. De la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte en la forma prevista en el artículo 110, por el término de tres (3) días, dentro del cual sólo podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo trámite deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada.
3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva.

- **Condena en Costas procesales**

El artículo 188 del CPACA⁷ dispone que salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la liquidación de la condena en costas se regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso).

Así pues, el artículo 365 del CGP, dispone que la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o

⁷ Adicionado por el artículo 47 de la ley 2080 de 2021.

revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

....

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo, podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr008.htmlDe otra parte, el artículo 366 ibidem señala que las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obediencia a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:

“1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla.

2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso.

3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado

...

4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.

5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo...”

Conforme lo expuesto, se condenará en costas por concepto de agencias en derecho a EMCALI EICE ESP, de conformidad con lo previsto en el inciso 2° del artículo 440 y 446 del CGP, para lo cual de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º, numeral 4, del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura se fija el 5% del valor total ordenado en la presente providencia es decir, la suma de \$147.301.

En mérito de lo expuesto, el Despacho,

II. RESUELVE:

PRIMERO. - SEGUIR adelante la ejecución para el pago de la suma determinada a favor de los señores CARLOS ALBERTO MURGUEITIO MANRIQUE, CATALINA MURGUEITIO MANRIQUE y MARÍA ANDREA MURGUEITIO MANRIQUE y en contra de EMCALI EICE ESP, correspondiente al valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (\$2.946.025,87), dividida entre los ejecutantes, por concepto de intereses moratorios; suma que será **INDEXADA** para efectos de su pago, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. – PRACTIQUESE la liquidación del crédito de conformidad con las reglas previstas en el artículo 446 del Código General del Proceso y de acuerdo con la orden de seguir adelante la ejecución, contenida en esta providencia.

TERCERO: CONDENAR a la parte ejecutada, EMCALI EICE ESP, al pago de costas procesales. Por concepto de agencias en derecho, se fija el 5% de la suma determinada en la presente orden, en equivalente a un total de \$147.301

CUARTO. - Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 440 del C.G.P.

QUINRO.- Todos los memoriales que se presenten durante el trámite del presente proceso, deberán ser allegados a través de la **ventanilla virtual** en la plataforma Samai (<https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/>) con copia a los correos electrónicos de los demás sujetos procesales.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

(Firmada electrónicamente por Samai)
LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

(Firmada electrónicamente por Samai)
PATRICIA FEUILLET PALOMARES

(Firmada electrónicamente por Samai)
OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT